

OPINIÓN

¿IA propia o extranjera?

Omar Salinas Silva – Director Ingeniería Civil
Informática Advance UNAB

La inteligencia artificial ha evolucionado de ser una herramienta opcional a convertirse en infraestructura de decisión fundamental. En Chile, la IA influye en la atención al cliente, la educación, la salud, la banca y los servicios públicos. Actualmente, el país desarrolla cierta IA propia, pero aún depende en gran medida de tecnología extranjera para competir a escala global. El Estado ha realizado avances importantes, como el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y el modelo Latam-GPT, diseñado para el contexto latinoamericano. También se están formando capacidades locales de supercómputo y entrenamiento de modelos. Sin embargo, gran parte de la infraestructura sigue dependiendo de empresas como Amazon Web Services, Meta y OpenAI. Muchos modelos locales, como Latam-GPT, se basan en tecnologías externas. Esta dependencia conlleva costos palpables. En el ámbito académico, limita la investigación cuando los datos se gestionan desde el exterior. En la vida diaria, entidades externas pueden decidir sobre créditos o atención médica sin garantías de transparencia. Cuando la IA actúa como “caja negra”, la necesidad de supervisión y rendición de cuentas se vuelve crítica. Organizaciones internacionales sugieren desarrollar la IA bajo principios de derechos humanos y transparencia. Chile trabaja en un proyecto de ley que regula estos sistemas, aunque la legislación sola no basta sin capacidades y recursos. Fomentar la soberanía tecnológica no implica aislamiento; requiere acciones concretas. Es esencial formar talento especializado en universidades, financiar emprendimientos locales que adapten modelos a contextos nacionales y establecer marcos de gobernanza que aseguren transparencia en los usos críticos. Tres riesgos fundamentales requieren atención simultánea: dependencia tecnológica, pérdida de control sobre datos sensibles y desigualdad algorítmica que podría ampliar brechas sociales. Si unas pocas entidades controlan la infraestructura, Chile se convierte en cliente y no en protagonista de su modernización. Las soluciones son prácticas: políticas públicas que integren financiamiento y formación, alianzas público-privadas para la transferencia tecnológica y estándares que exijan responsabilidad. Involucrar a la ciudadanía en estos procesos es clave. El desafío no es simplemente usar IA extranjera, sino cómo hacerlo sin renunciar al control democrático sobre decisiones que afectan a la población. Chile debe elegir entre arrendar su modernización o construir, con visión y recursos, una inteligencia autóctona que pueda auditarse y gobernarse.